

Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes

Preámbulo

Desde 2002, la Iglesia en Estados Unidos ha experimentado una crisis sin precedentes en nuestros tiempos. El abuso sexual de niños y jóvenes cometido por algunos diáconos, sacerdotes y obispos, y la manera en que estos delitos y pecados fueron tratados, han causado enorme dolor, cólera, y confusión. Como obispos, hemos reconocido nuestros errores y la parte que nos toca en ese sufrimiento; pedimos perdón y asumimos la responsabilidad nuevamente, por haber fallado con frecuencia a las víctimas y al pueblo católico en el pasado. Desde lo más hondo de nuestro corazón, nosotros, los obispos, expresamos nuestro profundo pesar y tristeza por lo que el pueblo católico ha padecido.

Con la revisión del *Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes*, reafirmamos nuestro firme compromiso de crear un ambiente seguro dentro de la Iglesia para niños y jóvenes. Hemos escuchado el profundo dolor y sufrimiento de los que han sido víctimas del abuso sexual y seguiremos respondiendo a sus llamados. Hemos examinado intensamente el pecado, la criminalidad y el abuso de confianza perpetrados por algunos miembros del clero. Hemos determinado lo mejor que hemos podido el alcance del problema de este abuso de menores en nuestro país, y esperamos los resultados de un estudio sobre sus causas y su contexto.

Continuamos brindando especial atención y afirmando nuestro compromiso de prestar ayuda a las víctimas del abuso sexual y a sus familias. El daño causado por el abuso sexual de menores es devastador y duradero. Les pedimos perdón por el grave daño que se les ha infligido y les ofrecemos nuestra ayuda para el futuro. La pérdida de confianza, que es a menudo consecuencia de dicho abuso, es aun más trágica cuando conduce a la pérdida de la fe, la cual es nuestro deber sagrado promover. Hacemos nuestras las palabras de Su Santidad, el papa Juan Pablo II que expresan que el abuso sexual de los jóvenes es “desde todos los puntos de vista... inmoral y, con razón, la sociedad lo considera un crimen; es también un pecado horrible a los ojos de Dios” (*Discurso en la Reunión Interdicasterial con los Cardenales de Estados Unidos*, 23 de abril de 2002).

Junto con las víctimas y sus familias, toda la comunidad católica de este país ha sufrido a causa de este escándalo. En los últimos tres años, el intenso escrutinio público de una minoría de clérigos ordenados que han traicionado su llamado, ha causado que la vasta mayoría de sacerdotes y diáconos fieles experimentaran una enorme vulnerabilidad a interpretaciones incorrectas en su ministerio e incluso a la posibilidad de acusaciones falsas. Compartimos con ellos el firme compromiso de renovar la imagen de la vocación de las Órdenes Sagradas, para que se continúe percibiéndolas como una vida de servicio hacia los demás, inspirada en el ejemplo de Cristo nuestro Señor.

Nosotros, a quienes se nos ha dado la responsabilidad de ser pastores del pueblo de Dios, continuaremos, con su ayuda y con la plena colaboración de todos los fieles, trabajando para restaurar los vínculos de confianza que nos unen. Las palabras por sí solas no

pueden lograr este objetivo. Se iniciará con las acciones que llevemos a cabo en nuestra Asamblea General, y localmente, en nuestras diócesis y eparquías.

Sentimos una particular responsabilidad por “el ministerio de la reconciliación” (2 Cor 5, 18) que Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo, nos ha otorgado. El amor a Cristo nos impulsa a pedir el perdón de nuestras propias faltas pero también a llamar a todos —a los que han sido víctimas, a los que han pecado, y a todos los que han sentido la herida de este escándalo— a ser reconciliados con Dios y uno con el otro.

Quizás en forma nunca antes experimentada, hemos sentido cómo el poder del pecado ha tocado a toda nuestra familia eclesial en este país; pero como expresa San Pablo con audacia, a Cristo “que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos”.(2 Cor 5, 21) Que nosotros, que hemos conocido el pecado, podamos experimentar también, por medio del espíritu de la reconciliación, la propia rectitud de Dios.

Sabemos que tras un dolor tan profundo, la cura y la reconciliación están más allá de la capacidad humana. Sólo la gracia y la misericordia de Dios nos sacarán adelante, confiando en la promesa de Cristo: “para Dios todo es posible” (Mt 19, 26).

Al abocarnos a cumplir con esta responsabilidad, confiamos en primer lugar en Dios Todopoderoso, para que nos sostuviera en la fe y en el discernimiento del curso correcto a seguir.

Hemos recibido la guía y el apoyo fraternal de la Santa Sede, que nos ha sostenido en esta época de sufrimiento.

Hemos confiado en los fieles católicos de Estados Unidos. En toda la nación y en cada diócesis, la sabiduría y los conocimientos de clérigos, religiosos y laicos han contribuido inmensamente a hacer frente a los efectos de la crisis y a tomar las medidas para resolverla. Estamos llenos de gratitud por su enorme fe, por su generosidad y por el apoyo espiritual y moral que hemos recibido de ellos.

Reconocemos y afirmamos el fiel servicio de la vasta mayoría de nuestros sacerdotes y diáconos, y el amor que su pueblo siente hacia ellos. Cuentan merecidamente con nuestra estima y la del pueblo católico por su buen trabajo. Es lamentable que su dedicado testimonio ministerial haya sido ensombrecido por esta crisis.

En forma especial, agradecemos a las víctimas del abuso sexual cometido por clérigos y a sus familias, que han confiado en nosotros lo suficiente para compartir sus historias y para ayudarnos a apreciar más plenamente las consecuencias de esta reprensible violación de la confianza sagrada.

Que no haya dudas ni confusión para nadie: Para nosotros, sus obispos, nuestra obligación de proteger a niños y jóvenes, y de impedir el abuso sexual, emana de la misión y del ejemplo que nos brindó Jesucristo, en cuyo nombre servimos.

Mientras trabajamos para restaurar la confianza, recordamos la forma en que Jesús demostró una constante preocupación por los vulnerables. Jesús inauguró su ministerio con estas palabras del profeta Isaías:

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido
para llevar a los pobres la buena nueva,
para anunciar la liberación a los cautivos
y la curación a los ciegos,
para dar libertad a los oprimidos
y proclamar el año de gracia del Señor. (Lc 4, 18-19)

En Mateo 25, el Señor, en su comisión a los apóstoles y discípulos, les dijo que cada vez que demostraban su compasión y misericordia hacia los más débiles, demostraban su compasión hacia él.

Jesús extendió esta preocupación en forma tierna y urgente hacia los niños, reprendiendo a sus discípulos por mantenerlos alejados de él: “Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí” (Mt 19,14). E impartió la seria advertencia de que sería mejor, para todo el que llevara a los pequeños por mal camino, “que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar” (Mt 18,6).

Estas palabras del Señor nos parecen proféticas para este momento. Nosotros, los obispos, con la firme determinación de restaurar el vínculo de confianza, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar constantemente en lo pastoral para reparar la brecha creada con los que han sufrido el abuso sexual y con todo el pueblo de la Iglesia.

A la luz de este espíritu, en el curso de los tres años pasados, los principios y procedimientos de este *Estatuto* han sido incorporados a la vida eclesial:

- La Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes es el centro desde el cual se brinda un enfoque coherente, continuo y global para crear un ambiente seguro para los jóvenes en toda la Iglesia de Estados Unidos.
- La Oficina también brinda los medios para evaluar el logro de los objetivos del *Estatuto*, tal como lo demuestran sus dos informes acerca de la implementación de éste, basados en auditorías independientes sobre su cumplimiento.
- El Comité Nacional de Revisión está llevando a cabo su responsabilidad de asistir en la evaluación del cumplimiento del *Estatuto* en las diócesis, y de encomendar estudios acerca del abuso sexual de menores, y ha emitido su propio *Report on the Crisis in the Catholic Church in the United States* [Informe sobre la Crisis de la Iglesia Católica en Estados Unidos].

- El estudio descriptivo sobre la naturaleza y el alcance del abuso sexual de menores cometido por clérigos católicos en los Estados Unidos, encomendado por el Comité Nacional de Revisión ha sido finalizado. El estudio resultante, que examina el período histórico entre 1950 y 2002, realizado por el John Jay College of Criminal Justice, nos brinda una poderosa herramienta no sólo para examinar nuestro pasado sino también para asegurar nuestro futuro contra dicha conducta inapropiada.
- Se han establecido coordinadores de asistencia para víctimas en toda la nación a fin de ayudar a las diócesis a responder a las necesidades pastorales de los que han sido perjudicados por el abuso.
- Comités de revisión en cada diócesis asesoran y ayudan enormemente a los obispos diocesanos/eparquiales a tomar las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones del *Estatuto*.
- Se han establecido programas para fomentar ambientes seguros con el fin de ayudar a padres y niños —y a los que trabajan con niños— a prevenir todo daño para los jóvenes.

Mediante estas medidas y muchas otras, seguimos comprometidos con la seguridad de nuestros niños y jóvenes.

Aunque, aparentemente, el alcance de este problema perturbador del abuso sexual de menores por parte de clérigos se ha reducido en el curso de la última década, los efectos dañinos de este abuso continúan afectando tanto a las víctimas como a las diócesis.

Por lo tanto, hemos reexaminado y revisado el *Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes* con una conciencia intensa del esfuerzo aun necesario para enfrentar plenamente los efectos de esta crisis, y con la sabiduría obtenida por la experiencia de estos últimos tres años. Reiteramos hoy que ayudaremos a curarse a los que han sido heridos, haremos todo lo que está en nuestro poder para proteger a los niños y jóvenes, y trabajaremos con nuestros clérigos, religiosos y laicos para restaurar la confianza y armonía en nuestras comunidades de fieles, mientras oramos para que venga a nosotros el reino de Dios, aquí en la tierra, como en el cielo.

Para que se cumplan nuestros objetivos de crear un ambiente seguro para niños y jóvenes dentro de la Iglesia, y de impedir el abuso sexual de menores por clérigos en el futuro, nosotros, miembros de la United Conference of Catholic Bishops, hemos esbozado en este *Estatuto* una serie de medidas prácticas y pastorales que nos comprometemos a implementar en nuestras diócesis y eparquías:

Fomentar la curación de las víctimas/los sobrevivientes del abuso sexual de menores y la reconciliación con ellos

ARTÍCULO 1. Las diócesis/eparquías deben prestar ayuda a las víctimas/los sobrevivientes y sus familias, y deben demostrar su sincero compromiso con el bienestar espiritual y emocional de éstas. La primera obligación de la Iglesia en relación con las víctimas es la de curación y reconciliación. Cada diócesis/eparquía debe continuar su proceso de acercamiento para llegar a toda persona que, siendo menor, haya sido víctima de abuso sexual* por cualquiera al servicio de la Iglesia, ya sea si el abuso ha ocurrido recientemente o muchos años atrás. Este acercamiento puede incluir servicios de asesoramiento, ayuda espiritual, grupos de apoyo, y otros servicios sociales seleccionados por la víctima y por la diócesis/eparquía de común acuerdo.

Como parte del acercamiento pastoral a las víctimas y a sus familias, el obispo diocesano/eparquial, o su representante, debe ofrecer reunirse con ellas para escuchar paciente y compasivamente sus experiencias y sus preocupaciones, y para compartir el “profundo sentimiento de solidaridad y preocupación” expresado por Su Santidad, el papa Juan Pablo II en su *Discurso en la Reunión Interdicasterial con los Cardenales de Estados Unidos* (23 de abril de 2002).

ARTÍCULO 2. Las diócesis/eparquías deben tener reglamentos y procedimientos establecidos para responder rápidamente a cualquier imputación en la que haya razón para creer que ha habido abuso sexual de un menor. Las diócesis/eparquías deben contar con una persona o personas competentes para coordinar la ayuda para el cuidado pastoral inmediato de aquellos que den parte de haber sufrido, siendo menores, abuso sexual cometido por clérigos u otro personal eclesial. Los procedimientos para aquellos que presenten una denuncia deben estar disponibles de inmediato, en forma escrita y en las lenguas principales en que se celebra la liturgia en esa diócesis/eparquía, y deben ser anunciados públicamente por lo menos una vez al año.

Las diócesis/eparquías deben tener, asimismo, un comité de revisión que obrará como un cuerpo de consulta confidencial para el obispo/eparca. La mayoría de sus miembros deben ser laicos que no estén empleados por la diócesis/eparquía (ver la Norma 5 en *Normas básicas para las reglas diocesanas/eparquiales que traten de alegaciones de abuso sexual de menores por sacerdotes o diáconos*, 2002). Este comité debe asesorar al obispo diocesano/eparca en su análisis de las imputaciones de abuso sexual de menores y en su determinación de las aptitudes de un clérigo para el ministerio. El comité debe revisar periódicamente los reglamentos y procedimientos diocesanos/eparquiales para tratar el abuso sexual de menores. Además, el comité puede examinar estos asuntos en forma retrospectiva y prospectiva, y asesorar en todos los aspectos de las respuestas relacionadas con estos casos.

ARTÍCULO 3. Las diócesis/eparquías no deben alcanzar acuerdos que obliguen a las partes a mantener confidencialidad, a menos que la víctima/el sobreviviente la pida y que ese pedido esté indicado en el texto del acuerdo.

Garantizar una respuesta eficaz a las imputaciones de abuso sexual de menores

ARTÍCULO 4. Las diócesis/eparquías deben dar parte a las autoridades públicas de toda imputación de abuso sexual de un menor. Las diócesis/eparquías deben cumplir con todas las leyes civiles pertinentes respecto a la notificación de imputaciones de abuso sexual de menores a las autoridades públicas y deben cooperar con la investigación, de acuerdo con las leyes de la jurisdicción local.

Las diócesis/eparquías deben cooperar con las autoridades públicas sobre la denuncia de casos, incluso cuando la persona ya no sea menor de edad.

En cada situación, las diócesis/eparquías deben informar a la víctima acerca de su derecho a denunciar el hecho a las autoridades públicas y deben apoyar ese derecho.

ARTÍCULO 5. Afirmamos las palabras de Su Santidad, el papa Juan Pablo II, en su *Discurso en la Reunión Interdicasterial con los Cardenales de Estados Unidos*: “En el sacerdocio y en la vida religiosa no hay lugar para quienes dañan a los jóvenes”.

El abuso sexual de un menor por un clérigo es un delito en la ley universal de la Iglesia (CIC, c. 1395 § 2; CCEO, c.1453 § 1). Dada la gravedad de este asunto, se ha reservado su competencia judicial a la Congregación para la Doctrina de la Fe (Motu proprio, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, AAS, 93, 2001). El abuso sexual de un menor es también un delito en todas las jurisdicciones civiles de los Estados Unidos.

Los reglamentos diocesanos/eparquiales deben estipular que cuando se haya admitido o se haya demostrado, después de un proceso apropiado de acuerdo a la ley canónica, la perpetración incluso de un único acto de abuso sexual de un menor*—cuando quiera que hubiere ocurrido—el sacerdote o diácono infractor debe ser removido permanentemente del ministerio y, si el caso lo requiere, expulsado del estado clerical. De acuerdo con el propósito expreso de este *Estatuto*, debe ofrecérsele al sacerdote o diácono infractor asistencia terapéutica profesional, tanto con el propósito de prevenir como con el fin de su propia curación y bienestar.

El obispo diocesano/eparquial debe ejercer su potestad de gobierno, dentro de los parámetros de la ley universal de la Iglesia, para asegurar que todo sacerdote o diácono bajo su gobierno, que haya cometido incluso un único acto de abuso sexual de un menor, tal como se lo describe más abajo, no continúe en el ministerio.

Debe concedérsele a todo sacerdote o diácono acusado de abuso sexual de un menor la presunción de inocencia durante la investigación de la acusación, y deben tomarse todos los recaudos para proteger su reputación. Debe alentársele a que contrate la asistencia de un abogado civil y uno canónico. Si la imputación no queda demostrada, deben tomarse todas las medidas posibles para restaurar su buen nombre, si éste ha sido perjudicado.

Para cumplir con este artículo, las diócesis/eparquías deben satisfacer los requisitos de la ley universal de la Iglesia y de las *Normas Básicas* aprobadas para Estados Unidos.

ARTÍCULO 6. Debe haber normas diocesanas/eparquiales claras y ampliamente divulgadas sobre la conducta ministerial y sobre los límites apropiados para el clero, para todo el personal remunerado y para los voluntarios de la Iglesia en cargos de confianza, que tengan contacto regular con niños y jóvenes.

ARTÍCULO 7. Las diócesis/eparquías deben ser abiertas y transparentes en su comunicación con el público relativa al abuso sexual de menores cometido por clérigos, dentro de los límites del respeto a la vida privada y a la reputación de los individuos involucrados. Esta práctica debe observarse especialmente al proporcionar información a la comunidad parroquial y a otras comunidades eclesiales afectadas directamente por mala conducta ministerial que involucre a menores.

Garantizar la responsabilidad de nuestros procedimientos

ARTÍCULO 8. Mediante la autoridad de la United States Conference of Catholic Bishops, se renueva el mandato del Comité Ad Hoc sobre Abuso Sexual y se lo constituye ahora en el Comité para la Protección de Niños y Jóvenes. Se lo convierte en un comité permanente de la Conferencia. Entre sus miembros debe haber representantes de todas las regiones episcopales del país, que deben ser nombrados en forma escalonada para mantener la continuidad del esfuerzo para proteger a niños y jóvenes.

El Comité debe asesorar a la USCCB en todos los asuntos relacionados con la protección de jóvenes y niños, y debe supervisar el desarrollo de planes, programas y presupuestos de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes. Debe proporcionar a la USCCB recomendaciones y planes relativos a la protección de niños y jóvenes, coordinando las iniciativas de la Oficina y el Comité Nacional de Revisión.

ARTÍCULO 9. La Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes, establecida por la Conference of Catholic Bishops, debe dotar de personal al Comité para la Protección de Niños y Jóvenes, y debe servir como recurso para asistir a diócesis/eparquías en la implementación de programas para lograr un “entorno seguro”, y en la capacitación y el desarrollo del personal diocesano responsable de los programas de protección de niños y jóvenes, teniendo en cuenta los recursos financieros y de otro tipo con los que se cuente, así como también la población, la zona y la composición demográfica de la diócesis/eparquía.

La Oficina debe producir un informe público anual sobre el progreso logrado en la implementación y el mantenimiento de las normas de este *Estatuto*. El informe debe basarse en un proceso de auditoría anual, cuyo método, alcance y costo deben ser aprobados por el Comité Administrativo, basándose en la recomendación del Comité para la Protección de Niños y Jóvenes. Este informe público debe incluir los nombres de las

diócesis/eparquías que, según la auditoría, no cumplen con las estipulaciones y expectativas de este *Estatuto*.

Como miembro del personal de la Conferencia, el Director Ejecutivo de la Oficina es nombrado por el Secretario General, ante el cual es responsable. El Director Ejecutivo debe proporcionar al Comité para la Protección de Niños y Jóvenes y al Comité Nacional de Revisión informes regulares sobre las actividades de la Oficina.

ARTÍCULO 10. Toda la Iglesia, especialmente el laicado, tanto en el nivel diocesano como nacional, debe comprometerse a mantener ambientes seguros en la Iglesia para niños y jóvenes.

El Comité para la Protección de Niños y Jóvenes debe contar con la asistencia del Comité Nacional de Revisión, un cuerpo consultivo establecido en 2002 por la USCCB. El Comité examinará el informe anual de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes sobre la implementación de este *Estatuto* en cada diócesis/eparquía y todas las recomendaciones que emerjan del mismo, y ofrecerá su propia evaluación, con respecto a su aprobación y publicación, al Presidente de la Conferencia.

El Comité también asesorará al Presidente de la Conferencia sobre sus futuros miembros. Los miembros del Comité son nombrados por el Presidente de la Conferencia en consulta con el Comité Administrativo, y son responsables ante el Presidente y ante el Comité Ejecutivo de la USCCB. Antes de contactar a un candidato, el Presidente de la Conferencia debe procurar, y obtener por escrito, el aval del obispo diocesano de dicho candidato. El Comité debe operar de acuerdo con los estatutos y reglamentos de la USCCB, y en el marco de las directrices establecidas por el Comité, en consulta con el Comité para la Protección de Niños y Jóvenes, y aprobadas por el Comité Administrativo de la USCCB. Estas directrices deben presentar asuntos tales como el propósito y la responsabilidad del Comité, sus funcionarios, los períodos en cada cargo y la frecuencia de los informes proporcionados al Presidente de la Conferencia sobre sus actividades.

El Comité ofrecerá su asesoramiento durante su colaboración con el Comité para la Protección de Niños y Jóvenes en asuntos relativos a la protección de niños y jóvenes, específicamente en cuanto a políticas y prácticas óptimas. El Comité Nacional de Revisión y el Comité para la Protección de Niños y Jóvenes se reunirán conjuntamente varias veces al año.

El Comité examinará el trabajo de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes y extenderá sus recomendaciones a su Director. Asistirá al Director en el desarrollo de recursos para las diócesis.

El Comité debe supervisar la finalización del estudio sobre las causas y el contexto de la reciente crisis. El Comité ofrecerá su evaluación de los datos recogidos y de los resultados preliminares al Comité para la Protección de Niños y Jóvenes a medida que el estudio avance.

ARTÍCULO 11. El Presidente de la Conferencia debe informar a la Santa Sede sobre este *Estatuto* revisado para indicar la forma en que nosotros, los obispos católicos, junto con toda la Iglesia en Estados Unidos, continuamos nuestro compromiso con la protección de niños y jóvenes. El Presidente también debe compartir con la Santa Sede los informes anuales sobre la implementación de este *Estatuto*.

Proteger a los fieles

ARTÍCULO 12. Las diócesis/eparquías deben mantener programas de “ambientes seguros”, que el obispo diocesano/eparquial considere que estén de acuerdo con los principios morales católicos. Deben llevarse a cabo en cooperación con padres, autoridades civiles, educadores y organizaciones comunitarias para proporcionar educación y capacitación a niños, jóvenes, padres, ministros, educadores, voluntarios y demás sobre la manera de establecer y mantener un ambiente seguro para niños y jóvenes. Las diócesis/eparquías deben comunicar claramente al clero, y a todos los miembros de la comunidad, las normas de conducta para el clero y para otras personas en cargos de confianza en lo concerniente a los niños.

ARTÍCULO 13. Las diócesis/eparquías deben evaluar los antecedentes de todos los sacerdotes y diáconos, incardinados y no-incardinados, que practiquen el ministerio eclesiástico en la diócesis/eparquía, y de todo el personal remunerado así como también de todos los voluntarios diocesanos/eparquiales y parroquiales/escolares, cuyas tareas incluyan un contacto regular, no-supervisado con menores. Específicamente, deben utilizar los recursos de los organismos encargados del cumplimiento de la ley y de otros organismos comunitarios. Además, deben emplear técnicas de pre-selección y evaluación apropiadas para determinar la aptitud de los candidatos a la ordenación (cf. National Conference of Catholic Bishops, *Program of Priestly Formation* [Programa de formación sacerdotal], 2006, no. 39).

ARTÍCULO 14. La transferencia de clérigos que hayan cometido un acto de abuso sexual de un menor, por motivos de residencia, incluyendo la jubilación, se llevará a cabo de acuerdo con la Norma 12 de las *Normas Básicas*. (cf. *Proposed Guidelines on the Transfer or Assignment of Clergy and Religious* [Normas propuestas para la transferencia o asignación de clérigos y religiosos], adoptadas por la USCCB, la Conference of Major Superiors of Men [Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos], la Leadership Conference of Women Religious [Conferencia de Líderes de Religiosas] y el Council of Major Superiors of Women Religious [Consejo de Superioras Mayores de Religiosas] en 1993).

ARTÍCULO 15. Para asegurar la colaboración continua y el esfuerzo mutuo en la protección de niños y jóvenes por parte de los obispos y de los ordinarios religiosos, dos representantes de la Conference of Major Superiors of Men [Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos] deben servir como consultores para el Comité para la Protección de Niños y Jóvenes. A invitación de los Superiores Mayores, el Comité designará dos de sus miembros para consultar con sus homólogos en la CMSM. Los obispos

diocesanos/eparquiales y los superiores mayores de institutos clericales, o sus delegados, deben reunirse periódicamente para coordinar sus funciones respecto al tema de las imputaciones presentadas contra un miembro clerical de un instituto religioso que ejerza su ministerio en esa diócesis/eparquía.

ARTÍCULO 16. Dado el alcance del problema del abuso sexual de menores en nuestra sociedad, estamos dispuestos a cooperar con otras iglesias y comunidades eclesiales, con otros cuerpos religiosos, con instituciones educativas y con otras organizaciones interesadas en realizar investigaciones en este campo.

ARTÍCULO 17. Prometemos nuestra cooperación plena con la Visita Apostólica de nuestros seminarios diocesanos/eparquiales y de las casas religiosas de formación recomendada en la Reunión Interdicasterial con los Cardenales de Estados Unidos y con los Funcionarios de la Conferencia, en abril de 2002.

Nos comprometemos a trabajar individualmente en nuestras diócesis/eparquías y conjuntamente como Conferencia, por medio de los comités apropiados, para fortalecer nuestros programas tanto de formación sacerdotal inicial como de formación continua de sacerdotes. Con una urgencia nueva, promoveremos programas de formación humana para la castidad y el celibato dirigidos a seminaristas y sacerdotes, basados en los criterios hallados en *Pastores Dabo Vobis*, el *Program of Priestly Formation* [Programa de Formación Sacerdotal] y el *Basic Plan for the Ongoing Formation of Priests* [Plan Básico para la Formación Continua de Sacerdotes]. Continuaremos ayudando a los sacerdotes, diáconos y seminaristas a poner en práctica su vocación en forma fiel e integral.

Nosotros, obispos y eparcas, nos comprometemos a trabajar en unidad con nuestros hermanos sacerdotes y diáconos, para promover la reconciliación entre todos los miembros de nuestras diócesis/eparquías, especialmente con aquellos individuos que sufrieron abuso y con las comunidades que sufrieron a causa del abuso sexual de menores que tuvo lugar en su seno.

Conclusión

Como escribimos hace tres años, “Es dentro de este contexto de la solidez esencial del sacerdocio y de la profunda fe de nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia que sabemos que podemos enfrentar y resolver esta crisis para hoy y para el futuro”.

Deseamos reiterar una vez más que la gran mayoría de los sacerdotes y diáconos sirven a su pueblo fielmente y que cuentan con la estima y el afecto de los fieles. También cuentan con nuestro amor y nuestra estima, y con nuestro compromiso de preservar su buen nombre y su bienestar.

Un medio esencial para resolver la crisis es la oración por la curación y la reconciliación, y los actos de reparación por la grave ofensa a Dios y la profunda herida infligida a su santo pueblo. Estrechamente conectado con la oración y con los actos de reparación, está

el llamado a la santidad de la vida y al cuidado del obispo diocesano/eparquial, para asegurar que él y sus sacerdotes hagan uso de las formas de probada eficacia para evitar el pecado y para crecer en la santidad de la vida.

Basándonos en la oración y la penitencia, renovamos las promesas que hicimos en el *Estatuto* original.

Prometemos solemnemente, unos a otros y a ustedes, pueblo de Dios, trabajar al máximo para la protección de niños y jóvenes.

Prometemos dedicar a esta meta los recursos y el personal que sean necesarios para lograrla.

Prometemos hacer todo lo posible para ordenar en el sacerdocio y colocar en cargos de confianza sólo a aquellos que compartan nuestro compromiso de proteger a niños y jóvenes.

Prometemos trabajar por la curación y la reconciliación de los que han sido objeto del abuso sexual cometido por clérigos.

Se han realizado muchas cosas para cumplir estas promesas. Oramos devotamente para que Dios que ha iniciado este buen trabajo en nosotros lo lleve a su fin.

Se publica este *Estatuto* para las diócesis/eparquías de Estados Unidos. El Comité para la Protección de Niños y Jóvenes con el asesoramiento del Comité Nacional de Revisión volverá a examinarlo dentro de cinco años. Los resultados de esa revisión serán presentados a la Conferencia de Obispos para su confirmación.

* De acuerdo con *Sacramentorum sanctitatis tutela* (SST), artículo 4§1, el abuso sexual, para el propósito de este *Estatuto*, deberá incluir todo delito cometido por un clérigo contra el Sexto Mandamiento del Decálogo con un menor tal como se lo describe en el *Código de Derecho Canónico*, c. 1395 §2 (“El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad [edad elevada en SST a dieciocho años, que ha constituido la mayoría de edad en los Estados Unidos desde 1994], debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”) y el *Código de Cánones de las Iglesias Orientales*, c. 1453 § (“Un clérigo que vive en concubinato o provoca escándalo permanente pecando públicamente contra la castidad debe ser castigado con una suspensión, a la que se pueden agregar gradualmente otras penas, hasta llegar a la deposición, si él persiste en el delito”)

Si existiera alguna duda sobre si un acto cuenta con los elementos necesarios para ser considerado como una violación externa, objetivamente grave, deben consultarse las obras de reconocidos teólogos morales, y deben obtenerse en forma apropiada las opiniones de expertos reconocidos (*Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State*, 1995, p. 6). En última instancia, es responsabilidad del obispo/eparca diocesano, con el asesoramiento de un comité de revisión calificado, determinar la gravedad del presunto acto.

El documento *Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes* fue elaborado por el Comité Ad Hoc sobre Abuso Sexual de la United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). Fue aprobado por el cuerpo en pleno de los obispos católicos de Estados Unidos en la Reunión General de junio de 2005 y ha sido autorizado para su publicación por el abajo firmante.

Monseñor William P. Fay
Secretario General, USCCB

Los textos bíblicos utilizados en esta obra han sido extraídos del *Leccionario Mexicano*, copyright © 2005, Obra Nacional de la Buena Prensa, México, D.F. y se utilizan con permiso del propietario de los derechos. Todos los derechos reservados.

Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes

Copyright © 2002, United States Conference of Catholic Bishops
Washington, D.C. 20017.

Copyright © 2005, United States Conference of Catholic Bishops
Washington, D.C. 20017.